



8.

Globalización, trabajo y violencia en la zona bananera de Colombia



Globalización, trabajo y violencia en la zona bananera de Colombia

DOI: <https://doi.org/10.54118/controver.vi219.1274>

Por Aviva Chomsky*

Resumen: en este artículo¹ se examina cómo la globalización y la violencia han dado forma a las organizaciones de trabajadores en la zona bananera de Urabá, al norte de Colombia, desde la década de los sesenta hasta la actualidad. Los primeros sindicatos tuvieron como aliadas a las organizaciones políticas de izquierda y a la guerrilla. Los bananeros, con el apoyo del Estado neoliberal y el paramilitarismo de derecha, desataron una extraordinaria ola de violencia para acabar con los sindicatos de izquierda. A su vez, atrajeron a la derecha dentro de los sindicatos alegando un conjunto de intereses comunes para reformar el comercio mundial del banano, en beneficio de los productores colombianos. En la década de los noventa, un nuevo sindicato de derecha en Urabá, al mismo tiempo que mostró ser capaz de colaborar con la patronal en aras de su participación regional articulada en la industria, promovió la unidad laboral internacional con el objetivo de presionar a las transnacionales bananeras a aceptar los estándares laborales mínimos.

Palabras clave: globalización, violencia, sindicatos, Urabá.

Globalization, Labor, and Violence in Colombia's Banana Zone

Abstract: This article examines how globalization and violence have shaped workers's organizations in the Urabá banana zone in northern Colombia from 1960s to the present. Early unions found allies in leftist political and guerrilla organizations. The banana growers relied on the neoliberal state and rightist paramilitaries to unleash an extraordinary wave of violence to crush the

* Salem State College.

1 Traducción del artículo "Globalization, Labor, and Violence in Colombia's Banana Zone" de Aviva Chomsky, publicado en *International Labor and Working Class History: "New Studies in Labor Organization: Latin America and Beyond"*, n.º 72, pp. 90-115, año 2007, realizada por la Mg. María Sol Fransoi, doctoranda en Antropología por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina; becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina; integrante de la línea Historia y Antropología Social de los Trabajadores, del Instituto de Investigaciones Socio Históricas Regionales (ISHIR - CONICET Rosario), Argentina. Correo: msolfransoi@gmail.com

leftist unions. They also wooed the right within the unions by pleading a set of common interests in reforming the global banana trade to the benefit of Colombian producers. By the 1990s, a newly right-dominated union in Urabá proved adept at labor-management collaboration in the interest of their joint regional stake in the industry, but it also promoted international labor unity aimed at pressuring banana transnationals to accept minimum labor standards.

Keywords: globalization, violence, unions, Urabá.

Cómo citar este artículo: Chomsky, Aviva (2022). Globalización, trabajo y violencia en la zona bananera de Colombia. *Revista Controversia*, (219), 283-331.

Introducción

En América Latina, la globalización se ha asociado a políticas económicas neoliberales y programas de ajuste estructural impuestos por las instituciones financieras internacionales, así como por el distanciamiento de las políticas proteccionistas, populistas y redistributivas del período de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) de mediados de siglo xx. Estos programas y políticas han intentado integrar la economía mundial alentando la inversión extranjera, haciendo hincapié en las exportaciones y reduciendo los recursos del Estado destinados al bienestar social.

En la última década, muchos países latinoamericanos se han retirado de la política del neoliberalismo dominante en la región desde la década de los noventa. Sin embargo, Colombia, inmune al giro a la izquierda, se ha mantenido firme en el campo neoliberal. Actualmente cuenta con el mayor apoyo de los Estados Unidos, y presenta los índices más elevados de violencia contra las organizaciones de trabajadores en todo el hemisferio. En este artículo se explora la relación entre globalización, trabajo y violencia en Colombia, a partir del estudio de caso de la zona bananera de Urabá.

Si Colombia representa un extremo en la era de la represión laboral neoliberal, la zona bananera del norte de Urabá representa un extremo dentro de la misma Colombia. Desde los años 60, Urabá ha ofrecido a los inversores el Estado neoliberal ideal: un Estado que ha renunciado a todos los atributos redistributivos, que ha establecido una óptima seguridad financiera para las empresas y que ha privatizado prácticamente todas sus funciones, excepto la represión, aunque en realidad también el Ejército y la Policía han sido privatizados. La violencia contra los sindicatos y los trabajadores en Urabá es, así mismo, extrema, inclusive dentro del contexto colombiano.

Los acontecimientos en Urabá ofrecen un trágico caso de estudio sobre cómo algunos aspectos de la globalización han dado forma a las organizaciones de los trabajadores. Algunos de los trabajadores más indefensos y marginalizados del mundo encontraron aliados en organizaciones políticas de izquierda y guerrilleras, que eran a la vez globales en sus ideologías y locales en la práctica. Los bananeros se apoyaron en el Estado neoliberal y en la derecha paramilitar para desatar una extraordinaria ola de violencia y así acabar con los sindicatos de izquierda. Incluso atrajeron a la derecha dentro de los sindicatos, alegando un conjunto de intereses comunes para reformar el mercado global del banano en beneficio de los productores colombianos. En la década de los noventa, un nuevo sindicato dominado por la derecha en Urabá, al mismo tiempo que mostró ser adepto a la colaboración obrero-patronal bajo el interés de su participación conjunta en la industria regional, promovió la unidad laboral internacional con el objetivo de presionar a las transnacionales bananeras a que aceptaran los estándares laborales mínimos. La historia, a menudo trágica, de los sindicatos bananeros de Urabá, revela las oportunidades y las limitaciones a que se enfrentan los trabajadores y sus organizaciones sindicales bajo las viejas y nuevas formas de globalización.

Globalización y violencia en la historia colombiana

Muchos aspectos de la globalización neoliberal no son nada novedosos para América Latina. En efecto, han supuesto una vuelta a ciertos aspectos de la era liberal de crecimiento basado en las exportaciones, practicado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX: una economía basada en la inversión extranjera y las exportaciones, y un Estado comprometido a fomentar el sector exportador a través de una alianza con el capital extranjero, creando estructuras financieras que promueven beneficios, y estructuras sociales y políticas que facilitan una dura explotación del trabajo. La transición a la exportación desde la década del setenta como parte de la reestructuración económica mundial, es, en cierto modo, una restauración de viejos patrones de producción y de trabajo en América Latina (Mark, 2007).

Sin embargo, la globalización también es novedosa en algunos aspectos importantes. La gestión laboral ha adoptado algunas formas nuevas en la era neoliberal actual. Como el sector formal no ha proporcionado suficientes puestos de empleo y el Estado ha retirado su red de seguridad, los trabajadores temen que cualquier avance que consigan en el lugar de trabajo se vea rápidamente minado por las empresas mediante el traslado de la producción hacia lugares con menores costes laborales. En algunos casos, esto ha convertido a los trabajadores y a sus sindicatos en los mejores aliados de los empresarios. En otros, las organizaciones de trabajadores han defendido una “globalización desde abajo”, que incorpora la solidaridad y organización transfronteriza para revertir la “competición a la baja” (*race to the bottom*). La industria bananera colombiana ofrece un ejemplo de las dos respuestas obreras a la globalización, con la particularidad de que ambas han sido promovidas por el mismo sindicato.

Parte de la explicación de esta paradoja radica en el alto grado de violencia existente en Colombia en general y en la región bananera de Urabá en particular. Desde hace años, Colombia es conocida por su vio-

lencia, la cual estalló en una guerra civil de una década, denominada “La Violencia”, que sobrevino hacia finales de los años 40, y en la que murieron unas 200 000 personas. Los historiadores han descrito tradicionalmente a “La Violencia” como una batalla partidista entre liberales y conservadores, dominantes en Colombia. Los dos partidos tuvieron su origen en las divisiones regionales e ideológicas entre las élites del siglo XIX, y que traspasaron las fronteras de clase, regionales e ideológicas en el siglo XX. Una investigación reciente sugiere que “La Violencia” se entiende mejor en términos sociales y económicos, y señala que durante el conflicto en Urabá (como en otras regiones), las milicias de los terratenientes expulsaron a los campesinos de la tierra, dando paso a la expansión de la ganadería y la agricultura de exportación².

Tanto los actuales grupos paramilitares de “autodefensa” como la guerrilla más antigua y grande de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que desempeñaron un papel fundamental en la violencia desatada en Urabá en los años 80 y 90, tuvieron su origen en el marco de “La Violencia”. Las milicias de los terratenientes y los ganaderos pasaron por varias encarnaciones, surgiendo como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la década de 1990. Las FARC se fundaron en 1964 con estrechos vínculos con el Partido Comunista Colombiano, en parte para defender los territorios de los campesinos. Una segunda organización guerrillera, el Ejército Popular de Liberación (EPL), fundada en 1967 por un grupo maoísta disidente, también surgió como un actor importante en Urabá en la década de 1980.

Durante las dos primeras décadas de producción de banano en Urabá, los sindicatos fueron simplemente reprimidos con violencia. En los años 80, las FARC y el EPL se trasladaron a la región y comenzaron a trabajar intensamente con dos pequeños sindicatos obreros. A finales

2 Para un resumen de la literatura reciente, véase Roldán Mary (2002). Introducción. En Mary Roldán (Eds.). *A sangre y fuego. La violencia en Antioquia 1946-1953*, Colombia. NC: Durham.

de esta década surgió un sindicato fuerte, pero la guerrilla y los grupos paramilitares de derecha desataron una carnicería en la cual los trabajadores bananeros y los miembros del sindicato fueron las principales víctimas. A partir de esto, emergió una región dominada por los paramilitares de derecha y un nuevo sindicato que parecía capaz de encontrar un *modus vivendi* con la extrema derecha: los militares y la asociación de bananeros.

Además de la violencia, las condiciones económicas mundiales y las nuevas modalidades de internacionalismo laboral han dado forma a la inusual trayectoria de los sindicatos bananeros colombianos. Colombia ha aparecido en el radar de los sindicatos de todo el mundo que buscan desafiar la estrategia mundial de la patronal de presionar a la baja los salarios y las condiciones de trabajo. Con alrededor de 3000 sindicalistas asesinados en los últimos veinte años, Colombia encabeza permanentemente las listas de violadores de derechos laborales elaboradas por organizaciones de derechos humanos. Por estas razones, los sindicatos estadounidenses, canadienses y europeos han desarrollado programas de solidaridad con sus homólogos colombianos.

Con la aprobación de la patronal, el sindicato bananero de Colombia ayudó a formar una alianza regional de trabajadores del banano; presionó a una de las multinacionales bananeras más importantes para que firmara un acuerdo sobre normas laborales internacionales; y trabajó para fortalecer la posición de Colombia en los mercados internacionales del banano. El caso colombiano sugiere que el internacionalismo laboral y la globalización desde abajo pueden beneficiar a las empresas y que, incluso, estas podrían promoverlas, si desafiar la explotación laboral en otros lugares beneficia a su propia posición competitiva internacionalmente. Los grupos de solidaridad laboral internacional han ofrecido su apoyo a un sindicato asediado y han saludado la histórica coalición sindical regional. Al mismo tiempo, han criticado que el sindicato se adapte a los paramilitares de derecha y su abierto apoyo a la agenda económica neoliberal del presidente colombiano Uribe.

En este artículo se recorren los acontecimientos en Urabá desde el establecimiento de la industria bananera en los años 60, pasando por la violencia de los años 80 y 90, hasta la llegada de la inestable y precaria paz de los años 2000. Se pretende explicar las causas y la naturaleza de la violencia, su relación con la globalización y las inusuales alianzas engendradas en este contexto. Se pregunta, en primer lugar, cómo y por qué un sindicato pasó de la extrema izquierda a la derecha y, en segundo lugar, cómo y por qué un sindicato conocido a nivel nacional por su adaptación a la derecha y a la patronal ha asumido un papel de liderazgo en el internacionalismo laboral.

La historia de Urabá revela aspectos de la globalización neoliberal que tienen profundas raíces históricas en América Latina. También sugiere las pesadillas que pueden resultar cuando se implementa el sueño neoliberal. Los sindicatos de Urabá han construido una amplia gama de estrategias y alianzas bajo un contexto de extrema represión. Las formas en que se han enfrentado al orden neoliberal tanto en el país como en el extranjero, muestran los enormes obstáculos que afrontan los trabajadores, su búsqueda de nuevas estrategias, y la habilidad del orden neoliberal de socavar y evadir incluso las más audaces.

Las bananas llegan a Urabá

La industria bananera ha representado históricamente muchas características asociadas con la globalización: extrema movilidad del capital entre lugares de producción dispersos, subcontratación, uso de mano de obra migrante, privatización de la mayoría de las funciones estatales en las regiones y poca regulación. Los predecesores de la United Fruit Company (UFCO) establecieron las primeras plantaciones en la región de Santa Marta, en la costa norte de Colombia, en la década de 1890, al mismo tiempo que establecían operaciones en la costa Atlántica de Centroamérica. Cuando la empresa se consolidó en 1899, incorporó una

vasta y dispersa región de plantaciones bananeras en zonas costeras alejadas de los centros del poder político.

La industria bananera de Urabá de finales de siglo xx no ha sido una excepción a este patrón. Cuando la United Fruit Company entró en la región de Urabá, en el occidente de Antioquia, a principios de la década de 1960, reprodujo los sistemas y patrones que había desarrollado casi un siglo antes; sistemas y patrones que tienen mucho en común con los de la actual globalización neoliberal. La empresa entró en un área poco poblada, aislada de los centros de gobierno y de poder, con una escasa presencia estatal. Fue capaz de aliarse con sectores de la élite local y nacional, y convencer al Estado para que le ofreciera apoyo económico, fiscal, policial y militar para su proyecto. Y la United Fruit Company había inventado su propia competición a la baja, mucho antes de que los activistas le dieran ese nombre, a finales del siglo xx: desde principios de siglo cumplió sus apuestas y riesgos manteniendo la producción en varias regiones y enfrentando a los gobiernos nacionales para lograr condiciones óptimas, siempre con la amenaza de retirarse si no se cumplían sus deseos.

Las operaciones de la United Fruit Company en las áreas relativamente remotas que colonizó en toda América Latina desde el siglo pasado se caracterizaron por dos patrones básicos. En algunos contextos, como sus antiguas operaciones colombianas en Santa Marta, la empresa controlaba la tierra directamente, empleaba a los trabajadores y dirigía las plantaciones. En otros, los empresarios eligieron un método que se asocia, a menudo, con la reestructuración industrial actual: subcontrataban el control de la tierra y la mano de obra, y se limitaban a comprar y comercializar el producto³.

3 Marcelo Bucheli (2003) documenta una tendencia general a abandonar la producción directa en los 60, debido en parte a la Revolución guatemalteca de 1944-54 y a la Revolución cubana de 1959. En Costa Rica, la empresa recurrió a agricultores contratados desde principios del siglo xx (Chomsky, 1996).

En Urabá prevaleció este último patrón. United Fruit Company creó una filial colombiana, Banadex, que producía alrededor del diez por ciento del banano de la región, pero que dependía principalmente de los contratistas. La empresa concedió créditos y préstamos a los inversores colombianos con la condición de que adquirieran y titularan las tierras, y de que cumplieran con los requisitos de la empresa en cuanto a mejoras, drenajes, caminos, etc. (Botero, 1990, pp. 73-75). Los campesinos migrantes, que habían desbrozado la tierra sin título, en general, la perdieron durante este proceso en la década de 1960, y las pequeñas fincas bananeras fueron gradualmente absorbidas por las más grandes durante las décadas de 1970 y 1980 (Botero, 1990, pp. 76-77, 88-89). En continuidad con los patrones establecidos durante “La Violencia”, “la presión violenta y las amenazas de muerte” contribuyeron a “la expulsión masiva de campesinos” a medida que los productores de banano contratados por la empresa ampliaban sus explotaciones. (Comisión Andina de Juristas [CAJ], 1994, p. 35).

El empleo en la industria bananera de Urabá atrajo oleadas de migrantes: entre 1951 y 1964 la población se incrementó un 204 % hasta alcanzar 149 850 habitantes, y 249 239 en 1985 (Martin y Steiner, 1995, p. 52). La mayoría de los migrantes provenían del Chocó (Botero y Sierra, 1981, p. 106), una provincia vecina de población principalmente afrocolombiana. En 1984, Urabá producía el 92 % de las exportaciones de banano, y Colombia había pasado de exportar el 4,5 % de la producción mundial de banano en 1974 a un 11,5 % en 1985, convirtiéndose en uno de los cuatro mayores exportadores del mundo (Pearce, 1990, p. 250; Ramírez Tobón, 1997, p. 33). Con la expansión de la industria bananera llegaron el ejército, los sindicatos radicales y las organizaciones campesinas. A finales de la década de 1970 se sumaron las guerrillas armadas, y a mediados de los 80 los paramilitares.

En 1995 Urabá tenía una población de 350 000 habitantes, con 29 000 hectáreas plantadas de banano, en 409 fincas pertenecientes a 310 propietarios. Unas 16 000 personas trabajaban en estas plantaciones, mu-

chas de ellas recién llegadas a la región (Martin y Steiner, 1995, p. 4; Comisión Verificadora [CV], 1995, p. 14). Dos tercios de los trabajadores eran afrocolombianos que habían sido previamente campesinos, pequeños mineros o pescadores. Según una fuente autorizada, la mayoría de los migrantes eran veteranos de la lucha campesina y armada de los años 50 y 60, que ya estaban implicados o simpatizaban con los movimientos guerrilleros (Villarraga y Plazas, 1994, p. 204). La pobreza, la violencia y la expansión de la ganadería siguieron empujando a los migrantes de las provincias vecinas hacia Urabá durante la década de 1990, mientras que la expansión de la ganadería y la violencia en las zonas rurales de Urabá han empujado a los migrantes a deficientes e inadecuados centros urbanos (Martin y Steiner, 1995, p. 64).

Las condiciones de las plantaciones de banano en los años 60 y 70 eran ampliamente reconocidas por ser terribles. La jornada laboral duraba hasta 18 o incluso 20 horas; los trabajadores vivían en campamentos dentro de la propiedad de la empresa, sin agua, ni electricidad, muchas veces durmiendo en cajas de cartón (Romero, 1997, pp. 5-6; Sandoval, 1997, p. 180). En la década de 1960, el 72 % de los trabajadores vivía en los campamentos, y en 1979 el 89 % (Pearce, 1990, p. 251; Botero, 1990, p. 81). En 1979 solo algunos pocos de esos campamentos tenían agua corriente, electricidad o letrinas (Botero y Sierra, 1981, p. 93). Los centros urbanos eran prácticamente inexistentes, y la vivienda y los servicios públicos eran escasos (Martin y Steiner, 1995, p. 63). Las condiciones de vivienda en la ciudad bananera de Apartadó eran aún peores que en las plantaciones en 1979, e incluso en 1993 solo el 31 % de estas tenían acceso al agua corriente (Botero y Sierra, 1981, p. 150; CAJ, 1994, p. 44). Sin embargo, en parte por la violencia en las plantaciones, hacia 1987 el 75 % de los trabajadores bananeros de Urabá vivían fuera de las plantaciones, en los centros urbanos (Botero, 1990, p. 81).

Un estudio de 1997 concluyó que la combinación de los orígenes campesinos de los trabajadores, las condiciones de explotación laboral en

las plantaciones, la historia de organizaciones populares y el activismo guerrillero en la región, y el crecimiento de barrios marginales en los que vivían cada vez más trabajadores, hizo del proletariado bananero un actor social y culturalmente dividido por heterogéneas e incluso contradictorias tensiones, y por su evolución política desigual y accidentada. La base de los primeros movimientos sociales en Urabá estaba constituida por

pequeños agricultores que se convirtieron en trabajadores asalariados, ya sea temporaria o permanentemente, los pobres sin tierra que se desplazaron a la región en búsqueda de tierras ampliando las fronteras agrícolas, y minifundistas que perdieron sus parcelas y acabaron en minúsculos lotes suburbanos. (Ramírez Tobón, 1997, p. 43).

En 1969, cuando expiraron sus primeros contratos con la United Fruit Company, los contratistas privados de Urabá —en su mayoría miembros de la élite cafetera y textil de Antioquia— constituyeron la Asociación de Bananeros de Urabá (Augura) y fundaron su propia empresa exportadora (Botero, 1990, p. 100). Los miembros de Augura, afiliados al Partido Liberal, dominaban la política de la región, hasta que fueron desafiados por la izquierda a finales de la década de 1980 (Pearce, 1990, p. 252). Este desafío desató una orgía de violencia y un frágil equilibrio a fines de los años 90, que condujo a algunos trabajadores y exguerrilleros a una nueva alianza de derecha.

Los trabajadores del banano se organizan

La organización de los trabajadores en Urabá comenzó a muy pequeña escala y siguió con el patrón colombiano del entretejido de estrechas alianzas entre los sindicatos y los partidos políticos. Al igual que en otras regiones bananeras a principios de siglo, las organizaciones de izquierda vieron a Urabá como un campo fértil donde desplegar su actividad. El Partido Comunista Colombiano participó activamente en la

organización de los trabajadores bananeros de Santa Marta. La huelga realizada en 1928 contra la United Fruit Company, que movilizó a los campesinos y pequeños empresarios locales en apoyo de las reivindicaciones de los trabajadores, y que terminó con la masacre de entre 50 y 2000 trabajadores y sus familias por parte del ejército, ha adquirido un estatus casi mítico en la historia obrera colombiana. El político liberal Jorge Eliécer Gaitán, cuyo asesinato en 1948 desencadenó “La Violencia”, comenzó su carrera denunciando en el Senado colombiano a la empresa y la masacre, y el escritor Gabriel García Márquez, en *Cien años de soledad* (1967), la puso ante los ojos del público internacional.

El primer sindicato de Urabá, Sintrabanano, fue fundado en 1964 por simpatizantes del Partido Comunista entre los trabajadores de la construcción de la United Fruit Company, y se afilió a la confederación comunista (Pearce, 1990, p. 252; Botero, 1990, pp. 156, 161). En lo que se convertiría en un patrón recurrente, la empresa despidió rápidamente a los trabajadores organizados y, como sucedía con los líderes comunistas de la región, consiguió que los encarcelaran (Romero, 1997, p. 6). Los registros locales de la década de 1960 muestran oleadas de arrestos por delitos tales como “distribución de folletos comunistas” y “posesión de literatura extranjera y subversiva” (Botero, 1990, p. 142). En 1967 Sintrabanano se reagrupó, esta vez principalmente entre los trabajadores del sector bananero (Botero, 1990, p. 161).

Un segundo sindicato, Sintagro, se fundó en 1972 entre los trabajadores de los contratistas de la productora de palma africana de propiedad holandesa Coldesa S.A. (Botero, 1990, p. 156). Sintagro estaba afiliado a una Confederación Sindical Católica Nacional, que muchos empresarios colombianos veían como una alternativa deseable frente a los sindicatos más radicales. Los productores, sin embargo, llamaron al ejército y deportaron al secretario general y al abogado del sindicato cuando estos presentaron su primera propuesta de negociación en 1976. El sindicato fue derrotado, pero la respuesta llegó desde afuera de

las fuerzas obreras: la pequeña guerrilla del EPL asesinó al director de Relaciones Industriales de Codelsa S.A. (Botero, 1990, p. 164). Esta fue la primera, pero no la última participación directa de la guerrilla en un conflicto laboral.

Durante la década de 1970, la militarización, el asesinato y la aplicación de “pactos colectivos” entre propietarios y trabajadores que excluían al sindicato fueron la repuesta a los repetidos esfuerzos de organización sindical en las plantaciones bananeras (Botero, 1990, p. 163). Los despidos y los asesinatos siguieron a cada intento de organización (Botero, 1990, pp. 164-165). El ejército se volvió omnipresente en las asambleas de trabajadores, en las redadas y en la ocupación de las fincas bananeras en la década de 1970 (CAJ, 1994, p. 40).

En la plantación Revancha Galofre se produjo una secuencia de acontecimientos típica en 1979. Cuando el sindicato presentó sus propuestas de negociación, el propietario primero ofreció a su presidente 50 000 pesos para que la retirara. Este se negó y, un par de días después, fue asesinado. Cuando los trabajadores convocaron a una huelga, la plantación fue ocupada por el ejército, que les obligó a regresar (Pearce, 1990, pp. 252-253).

Un abogado que trabajó con Sintagro escribió que, en 1980, fue reiteradas veces “convocado, acosado y detenido temporalmente por el batallón militar Voltígeros. La detención arbitraria de trabajadores se convirtió en una práctica habitual, al igual que la presencia de soldados en las reuniones de los sindicatos”. Los soldados capturaron a los asistentes a una reunión de Sintagro en diciembre de 1981, llevando a varios trabajadores al cuartel general del batallón Voltígeros y allí los torturaron. A pesar de los ataques oficiales, Sintagro continuó negociando y firmando acuerdos con las compañías bananeras⁴.

4 Luis Asdrúbal Jiménez Vaca, “Comunicación N.º 859/1999” a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ginebra: Nacio-

En 1979, el 46 % de las explotaciones agrícolas de la región tenían algún tipo de convenio que regía las relaciones laborales, pero la mayoría de estos, el 80 %, eran “pactos colectivos” entre la patronal y los trabajadores, que excluían cualquier sindicato. Además del “terror colectivo” impuesto por los militares, la organización sindical se vio obstaculizada por la dispersión de los trabajadores en las distintas fincas (Botero y Sierra, 1981, p. 93). La dispersión fue social, cultural y, además, geográfica. Los nuevos trabajadores migrantes tendían a instalarse cerca de otros migrantes oriundos de las mismas regiones, “donde conservaron sus costumbres, tradiciones y hábitos alimenticios” (Botero y Sierra, 1981, p. 108). Es posible que los propietarios de las plantaciones hayan fomentado a propósito o inconscientemente estas divisiones, como sin duda lo hizo la UFCO en otras plantaciones. Un estudio de 1979 encontró una “división regional del trabajo” en Urabá, en la que los afrocolombianos del Chocó predominaban en los trabajos más difíciles, peligrosos y exigentes (Botero y Sierra, 1981, pp. 116-117). Además, los trabajadores se caracterizaban por su gran movilidad: en 1979 el 28.5 % llevaba menos de un año en Urabá y la duración promedio en la zona era de seis años (Botero y Sierra, 1981, pp. 130, 132).

La fragmentación de la mano de obra, la privatización del poder y los niveles de represión en Urabá no son para nada desconocidos por los historiadores de América Latina. Incluso durante el período de industrialización para la sustitución de importaciones (ISI), a mediados del siglo xx, cuando los sindicatos ganaron fuerza en nuevos sectores industriales, como en el caso de la industria automovilística en Brasil, el sector de la exportación continuó siendo caracterizado por la represión. La naturaleza del trabajo en las nuevas industrias exportadoras de El Salvador, que atrajeron inversionistas con sus bajos salarios, se basó

nes Unidas para los Derechos Humanos. <http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/O/b8708c80cebeac9ec1256c1b0004c520?Opendocument>.

en patrones establecidos desde hace mucho tiempo en la agricultura de exportación (Anner, 2007).

¿Un paraíso neoliberal?

La debilidad del Estado central colombiano es legendaria y se ha considerado un factor importante que ha contribuido a las peculiaridades de la historia del país, que van desde la violencia política hasta la fuerza del tráfico de drogas, pasando por la fragmentación de los sindicatos⁵. En parte debido a la represión contra las organizaciones más radicales, los sindicatos colombianos se han apoyado históricamente en mantener estrechos vínculos con uno de los dos partidos políticos mayoritarios (Liberal y Conservador) para su supervivencia. Se trata de un corporativismo con un sesgo colombiano: en lugar del Estado, fueron los partidos los que ofrecieron patronazgo para organizar a los trabajadores a cambio de su colaboración.

El actual impulso del neoliberalismo global para privatizar, desregular y, en general, reducir el rol del Estado en la sociedad (al menos como proveedor de servicios públicos), en cierto modo refleja la naturaleza histórica del Estado colombiano. Pero el caso de Urabá sugiere, además, otras dos conclusiones en torno al actual neoliberalismo como aspecto de la globalización. En primer lugar, el reciente desarrollo económico de Urabá, en lugar de ser simplemente una manifestación de la actual globalización, ilustra la forma típica en que la industria bananera ha operado en otras partes de América durante más de un siglo. En segundo lugar, un análisis más profundo sobre el rol del Estado en Urabá revela que su característica distintiva ha sido la represión, antes que la debilidad.

5 El historiador colombiano Gonzalo Sánchez (2001) llegó a calificar a Colombia de “país sin Estado”.

Podría parecer que la historia reciente de Urabá apoya la visión tradicional de la debilidad del Estado colombiano. Botero explica que “el desarrollo económico [allí] se abandonó al libre juego de las fuerzas del mercado, y que el Estado ha jugado un papel muy restringido” (1990). Las zonas urbanas como Apartadó se establecieron mediante una serie de invasiones y asentamientos; los servicios públicos eran prácticamente inexistentes (Botero, 1990, pp. 35, 50-51). La ausencia, o la presencia selectiva, del Estado tenía ventajas para los bananeros: impuestos bajos o directamente inexistentes, regulaciones medioambientales y laborales inexistentes, y subsidios a la producción (CAJ, 1994, p. 39)⁶. En 1991, Urabá fue declarada zona de libre comercio, suprimiendo todos los controles estatales sobre los alquileres, precios de los alimentos, la energía y las tarifas telefónicas. Los alquileres se cuadruplicaron, y los costes de energía y las tarifas telefónicas se tornaron los más altos del país (Sandoval, 1997, p. 179). La globalización tuvo sus costos.

A mediados de los años 90, incluso las empresas bananeras se quejaban de la falta de apoyo estatal a la región. La ausencia de servicios públicos exacerbada la conflictividad social y, de acuerdo a los propietarios, volvía más atractivos a los movimientos armados, la justicia privada y la anarquía (Sandoval, 1997, p. 183).

Sin embargo, el Estado no estuvo totalmente ausente, sino que más bien fue omnipresente a través de su brazo armado. En 1976, el gobierno nacional impuso alcaldes militares en los cuatro principales municipios de la región. Varios batallones establecidos allí mantuvieron una fuerte militarización incluso después de que se restaurara el poder civil en 1986 (CAJ, 1994, pp. 51-52). El politólogo colombiano William Ramírez Tobón (1997), sostiene que en lugar de una “ausencia” estatal, en Urabá el Estado se caracterizó por “una presencia parcial” que prescindió

6 Sandoval (1997) cita una tasa de evasión fiscal de entre cincuenta y setenta por ciento entre 1977-1981 (p. 181).

de las obligaciones sociales y solo sirvió a los intereses de la oligarquía bananera. “La red de infraestructuras, el apoyo crediticio y monetario para el capital invertido, la amigable estructura tributaria y la inclinación pro-exportadora de las políticas macroeconómicas han sido las principales formas de presencia del Estado en Urabá” (pp. 71-72).

Los investigadores de derechos humanos coincidieron en señalar que la intervención del Estado estaba fundamentalmente “orientada a garantizar seguridad a los empresarios y latifundistas a través de programas de pacificación militar, más que a generar programas para el desarrollo social... El gobierno nacional ha optado por enfatizar la pacificación por sobre los programas sociales” (CAJ, 1994, pp. 160-161). La presencia del Estado en Urabá consistía en unidades de inteligencia policial y militar, y seis batallones militares con 7000 efectivos (CAJ, 1994, pp. 160-161).

Las guerrillas de izquierda y los sindicatos

Dos grupos guerrilleros de izquierda establecieron una reducida presencia en Urabá en la década de 1970: las FARC, que tenía alrededor de 30 o 40 hombres armados divididos en tres frentes, y el EPL que contaba, incluso, con menos militantes⁷. Sin embargo, en la década de 1980 la conflictividad laboral en Urabá se convirtió en un escenario para el creciente activismo guerrillero. La prolongada relación entre el Partido Comunista y las FARC subyace en los vínculos de estas últimas con Sintrabanano. Tras una reorientación dentro del EPL, que sobrevino en la década de 1980, este comenzó a enfocarse en la organización laboral, el reclutamiento y la infiltración de Sintagro (Romero, 1997, p. 7)⁸.

7 El tercer grupo guerrillero más importante de Colombia, el ejército de inspiración cubana ELN, no estableció su presencia en Urabá.

8 El Congreso del EPL de 1980 concluyó que “la lucha armada no debe limitarse a las zonas marginales y agrarias, sino vincularse decididamente al proletariado industrial y agrícola” (Botero, 1990, p. 172). El EPL trabajó para reclutar a líderes de Sintagro como Argemiro y Hernán Correa. Argemiro se unió al EPL en 1983 (Villarraga y Plazas, 1994, p. 205).

De acuerdo con el politólogo Mauricio Romero, la relación continua entre los sindicatos de Urabá y los sectores armados desde finales de los años 70 ha dado resultados contradictorios a la oposición no armada. La actividad guerrillera, inevitablemente, estimuló el aumento de la represión oficial. Pero, al mismo tiempo, tuvo algunos beneficios: “En efecto, la guerrilla obligó a las empresas bananeras a aceptar los sindicatos y la negociación colectiva en la región” (Romero, 1997, p. 6).

Durante la primera mitad de la década de 1980, cuando las FARC y el EPL estrecharon sus relaciones con Sintrabanano y Sintagro, respectivamente, se agudizó la división entre ambos sindicatos. A mediados de la década, los acontecimientos a nivel nacional modificaron el terreno. Por un lado, las propuestas del gobierno abrieron un proceso de paz con ambos grupos guerrilleros. Por otro lado, por primera vez desde los años 30, los sindicatos colombianos fueron capaces de poner la unidad laboral por encima de las alianzas partidistas y de formar una confederación nacional no partidista. Sin embargo, en la remota región de Urabá, estos acontecimientos se desarrollaron de forma algo diferente. El proceso de paz pareció exacerbar la competencia entre los dos grupos guerrilleros, mientras que la unidad laboral se vio socavada por las mismas divisiones, y la respuesta de la derecha se desencadenó con mayor fuerza que en cualquier otra región del país.

A nivel nacional, la confederación sindical unitaria se vio favorecida por el crecimiento de los sindicatos independientes, especialmente en el sector público, así como por el crecimiento de las bases independientes entre los sindicatos afiliados a los partidos Liberal y Conservador. Los sindicatos independientes pasaron de representar el 25 % de la mano de obra organizada en 1967 a un 35 % en 1974 y a más del 50 % en 1984, y solían ser más fuertes y activos que los de las confederaciones partidistas (Pearce, 1990, pp. 136-137, 141).

El impulso de la independencia y la unificación creció en la década de 1980. El proceso de paz que inició el sistema político contribuyó a crear un espacio político para los sindicatos independientes. “Se pusieron en marcha tres procesos de unidad: dentro del propio sector independiente, entre los independientes y el Partido Comunista, y entre éstos y los disidentes de las confederaciones sindicales tradicionales”. En 1986, diecisiete federaciones de las agrupaciones conservadoras y tres de las liberales rompieron con sus organizaciones y se unieron a la confederación comunista y a los independientes para fundar la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) (Pearce, 1990, pp. 136-137, 141; Carbonell y Erazo, 1987)⁹.

La CUT rechazó enérgicamente la afiliación a cualquier partido político u organismo, pero también dejó clara su orientación política:

La CUT es un sindicato unificado, clasista, democrático y progresista (...) su tarea principal es la de defender incondicionalmente las conquistas y los derechos existentes de los trabajadores y del pueblo en general y buscar mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. Luchará por la plena independencia nacional, las libertades democráticas, la justicia social, el respeto por los derechos humanos y las transformaciones sociales que permitan el desarrollo y el progreso de nuestro pueblo. (Declaración de Principios de la CUT, citada en Carbonell y Erazo, 1987, pp. 253-254).

Mientras tanto, las negociaciones entre las FARC y el entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986) condujeron a un acuerdo en mayo de 1984, que abrió las estructuras políticas del país a la izquierda, invitando a la izquierda armada a desmovilizarse. El acuerdo permitió la elección directa de los alcaldes de Colombia y proporcionó la amnistía para aquellos miembros de las FARC que aceptaran desmovilizarse. De este acuerdo surgió la Unión Patriótica (UP), un nuevo partido de izquierda

9 Véase también Rodríguez y Rizzo (s/i).

no armada que, a pesar de la creciente presión militar, participó en las elecciones desde mediados de la década de 1980 hasta mediados de 1990. En agosto de 1984, el gobierno firmó un acuerdo similar con el EPL (Romero, 1997, p. 7)¹⁰.

Un analista colombiano sostiene que el proceso de paz contribuyó tanto a reorientar como a fortalecer la presencia de la guerrilla en Urabá:

Para la guerrilla, supuso una oportunidad para “respirar” y ganar influencia política en los principales sindicatos de la región. Cuando se rompieron los acuerdos de paz (primero con el EPL y luego con las FARC, en el caso de Urabá), los guerrilleros no se limitaron a volver a sus tradicionales zonas de colonización. También controlaban el movimiento obrero de la región y estaban dispuestos a realizar un trabajo político de masas. (Botero, 1990, p. 170).

En las entrevistas realizadas en Urabá a comienzos de los años 90, una comisión de derechos humanos encontró dos escuelas de pensamiento sobre el impacto de la guerrilla en los movimientos sociales. Algunos informantes sostenían que su presencia los debilitaba, ya que la gente temía involucrarse porque podría ser acusada de colaborar con esta. Otros consideraban que las acciones armadas de la guerrilla en los años 60 y 70 obligaron a los productores a dismantelar su “régimen feudal de hacienda” y a negociar con sus trabajadores. La comisión concluyó que, a pesar de su participación en los sindicatos, las guerrillas no tenían demasiados objetivos sociales, pues su trabajo político dentro de estos consistía principalmente en crear apoyo para sus acciones militares. Según la comisión, solo el alto al fuego de 1984 creó el espacio para que floreciera el movimiento sindical y para el surgimiento de partidos políticos alternativos. Al reducirse la amenaza de la presión armada,

10 Sobre las negociaciones, el acuerdo y la creación de la Unión Patriótica, véase Pearce (1990, p. 175).

la asociación de bananeros se mostró más dispuesta a negociar y los trabajadores pudieron canalizar sus acciones a través de organizaciones políticas y sindicales (CAJ, 1994, pp. 52-53, 56-57).

En un inicio las aperturas políticas a nivel nacional proporcionaron un espacio en el cual los trabajadores de Urabá lograron importantes avances. A finales de 1984 se produjo la primera gran huelga de toda la industria en la zona bananera —1500 trabajadores en dieciocho plantaciones—, que dio lugar a un acuerdo entre la asociación de empresas bananeras, Augura y los dos sindicatos, y que el gobierno debía hacer cumplir. Por primera vez en la historia nacional la tregua creó un espacio político para el activismo sindical y, en este marco, ambos sindicatos crecieron enormemente. En 1985 se firmaron 127 contratos, alcanzando al 60 % de la tierra sembrada con banano, y el 60 % de los trabajadores de la industria (el 43 % de Sintagro y el 14 % de Sintrabanano), un total de 4000 trabajadores (Romero, 1997, p. 253; Pearce, 1990, p. 253).

Sin embargo, la región de Urabá, altamente militarizada (y paramilitarizada), resultó ser un eslabón débil en la tregua nacional con la guerrilla. Allí, la violencia contra los sindicatos apenas se redujo: incluso, en 1985 se produjo el primer atentado con bomba contra las oficinas de Sintagro y el asesinato del portavoz del EPL, Óscar William Calvo, hecho que puso fin a la participación del EPL en el cese al fuego (Pearce, 1990, p. 253; CAJ, 1994, p. 58).

Igual de preocupante fue el hecho de que la apertura del espacio político a los movimientos guerrilleros contribuyó a lo que posteriormente se denominó “guerra sindical”, que creció desde mediados del año 1985. Los dos grupos guerrilleros intensificaron su trabajo en los sindicatos y compitieron por la lealtad de los trabajadores y el control territorial, formando las “cooperativas agrícolas del EPL” (*epl famrs*) y las “cooperativas agrícolas de las FARC” (*Farc farms*). Los propietarios de las fin-

cas supieron sacar ventaja de estas divisiones “firmando acuerdos con un sindicato para intentar debilitar al otro, aprovechando el conflicto y avivándolo aún más” (entrevista con dirigente sindical, extraída de Ramírez Tobón, 1997, p. 117).

Sintagro —bajo la influencia del EPL— representaba claramente a la mayoría de trabajadores, pero la Unión Patriótica, el partido político organizado por los desmovilizados de las FARC, dominaba la esfera política. El EPL acusó a las FARC de una serie de asesinatos de miembros de Sintagro y de utilizar la violencia para intentar establecer su influencia política en el movimiento sindical. Las FARC acusaron al EPL de rigidez ideológica, al negarse a participar en la apertura política o rechazar el diálogo. El EPL replicó que, mediante sus acusaciones (Botero, 1990, pp. 176-179), las FARC estaban incitando a la violencia oficial contra su organización. Incluso las denuncias públicas sobre la actividad paramilitar en Urabá comenzaron en 1985. El grupo paramilitar Muerte a los Revolucionarios del Nordeste (MRN), fundado por el ganadero y paramilitar Fidel Castaño, apareció en el nordeste de Antioquia y de Urabá en 1986, y sus amenazas y los asesinatos de líderes de la Unión Patriótica comenzaron con fuerza (Ramírez Tobón, 1997, p. 130).

A pesar de sus divisiones, tanto Sintagro como Sintrabanano se afiliaron a la nueva federación nacional, la CUT, cuando esta se fundó en 1986 (Medina, 1992, p. 162). Además, en ese mismo año se produjo la sustitución del presidente conservador Belisario Betancur por el liberal Virgilio Barco, que puso fin al proceso de paz con la guerrilla y dio paso al inestable cese al fuego con las FARC. Si el proceso de paz provocó un aumento en los niveles de violencia por parte de la derecha más recalcitrante que se había opuesto a las iniciativas de Betancur, su finalización los incrementó aún más (Romero, 1997, p. 8). El ejército estableció un gobierno militar en Urabá en 1987, asumiendo la autoridad política y civil (Romero, 1997, 9; Uribe, 1992, p. 251-256; Martin y Steiner, 1995, p. 76). Algunos testigos declararon que para 1987 existía un claro vínculo

entre Fidel Castaño y otros narcotraficantes, los paramilitares y la policía en la zona bananera. Otros mencionaron la existencia de una escuela de entrenamiento paramilitar en Carepa, donde el mercenario israelí, Yair Klein, impartía instrucción militar (CAJ, 1994, p. 104).

Ese mismo año, 24 líderes sindicales fueron asesinados durante las negociaciones de los contratos (de febrero a abril) y la sede de Sintagro fue destruida por segunda vez por un ataque de bomba. En septiembre, otros 16 sindicalistas fueron asesinados (Romero, 1997, p. 8). A finales de año se produjeron 200 asesinatos políticos en Urabá, cuyas víctimas en gran parte eran trabajadores bananeros y sindicalistas. La mayoría de los fundadores de Sintagro y Sintrabanano murieron a finales de 1987 (Pearce, 1990, p. 253).

No obstante, los acuerdos de abril de 1987 representaron un hito en las relaciones laborales de Urabá. El Ministerio de Trabajo aceptó mediar y logró un acuerdo para toda la industria, firmado por Sintagro, Sintrabanano y la Asociación de Bananeros (Medina, 1992, p. 162; Botero, 1990, p. 154). El acuerdo incluía a muchos más trabajadores que los contratos anteriores: 6730 representados por Sintagro (el 54,8 % de los trabajadores bananeros de la región) y 1685 (13,7 %) de Sintrabanano. Así, el 85 % de los trabajadores estaban afiliados a algún sindicato y el 87 % de las 20 400 hectáreas de las plantaciones bananeras estaban sujetas a un convenio colectivo (Botero, 1990, p. 169). A su vez, estos acuerdos representaron avances significativos en relación con los derechos de los trabajadores, puesto que incluían la jornada de ocho horas, los aumentos salariales, el desmantelamiento del sistema de campamentos de la empresa y la financiación de viviendas urbanas.

Una huelga general realizada en septiembre de 1987 tras los asesinatos del secretario general de Sintagro, un miembro de la Asociación de Trabajadores Nacionales, un concejal de la Unión Patriótica y el presidente de Sintrabanano, terminó en un acuerdo bajo el cual el gobierno nacio-

nal se comprometía a crear la Oficina Regional de Trabajo en Urabá, a investigar los asesinatos, a asegurar que no habría represalias contra los trabajadores que tomaron parte en la huelga y a garantizar la libre participación de todos los partidos en las próximas elecciones populares a la alcaldía (Botero, 1990, p. 155).

En 1987, el ala política del EPL y la Unión Patriótica llegaron a un acuerdo en Urabá, que también contribuyó a la posterior unificación de Sintagro y Sintrabanano en Sintrainagro, creado en el año 1988 (Emanuelsson, 2003; Romero, 1997, p. 3). Antes de esa fecha, Sintagro y Sintrabanano habían perdido su estatus legal tras negarse a abandonar una huelga que el gobierno declaró ilegal (cv, 1995, p. 17; Botero 1990, p. 169). La unión de los sindicatos de diversas tendencias en la CUT, concretada en 1986, parecía llegar por fin a Urabá. El nuevo Sintrainagro, que representaba alrededor de 14 000 trabajadores bananeros, también se afilió a la CUT (cv, 1995, p. 17).

Se produjo un proceso contradictorio en el que el sindicato negoció contratos fuertes, mientras que aumentaba la violencia contra sus propios miembros. De 1982 a 1988 fueron asesinadas en Urabá unas 699 personas, en su mayoría trabajadores bananeros; de 1986 a 1989 fueron asesinados 60 dirigentes y activistas de Sintrainagro (Pearce, 1990, p. 254; Informe Semanal Latinoamericano, 1989, pp. 89-95). Los ataques a los sindicatos y a la izquierda continuaron durante 1989. Las diferentes facciones en Sintrainagro trabajaron conjuntamente en una propuesta de negociación que cubría tres áreas: asegurar el reconocimiento legal del sindicato; asuntos sociales que incluían la problemática de la vivienda, la salud, la educación y el transporte; y la protección salarial (CAJ, 1994, p. 40). Al iniciarse las negociaciones en septiembre, dos sindicalistas —uno de ellos miembro de la comisión negociadora— fueron asesinados; a fines de octubre, un miembro del Partido Comunista, que también era miembro de Sintrainagro, y un miembro de la comisión negociadora y líder de la Unión Patriótica fueron asesinados a tiros en

Apartadó (CAJ, 1994, p. 42; United Press International, 1989). Unos 14 000 trabajadores iniciaron una huelga el 1 de noviembre, junto con un paro cívico de dos días exigiendo la investigación del número extraordinariamente alto de asesinatos políticos en la zona¹¹. Tres trabajadores y un administrador de una plantación fueron asesinados el primer día de la huelga. Aunque el objetivo inicial de esta era protestar por los recientes asesinatos, se extendió a lo largo del mes de noviembre ante la negativa de Augura a aceptar el aumento salarial del 30 %. A finales del mes, un reportero encontró la región bajo un estricto control militar y a numerosos manifestantes viviendo en campamentos temporales en el centro de Apartadó, adonde habían huido del hostigamiento oficial sufrido en las plantaciones. La huelga terminó a inicios de diciembre dejando un saldo de 9 sindicalistas muertos, un acuerdo del 29 % de incremento salarial para el primer año y el 27 % para el siguiente, el reconocimiento del acuerdo previamente firmado con Sintagro y Sintrabanano, y la atención al problema de la vivienda (CAJ, 1994, pp. 40-41; Informe Semanal de América Latina, 1989c).

Aunque la coincidencia de la serie de victorias sindicales y el aumento de la violencia frente a los sindicatos a finales de los 80 parezca paradójica, bajo el contexto colombiano adquiere todo el sentido del mundo. Los acuerdos de paz y la creciente fuerza de la izquierda no armada en la esfera política provocaron una feroz respuesta de la derecha armada a lo largo y ancho del país. En ninguna parte esta respuesta fue tan violenta como en Urabá, donde los paramilitares ya tenían un fuerte arraigo y tanto el capital extranjero como el local estaban acostumbrados a ejercer su autoridad incontestada sobre los trabajadores. Fue el triunfo de una organización laboral no violenta lo que alimentó la violencia de los productores y paramilitares a finales de la década de 1980.

11 “Colombia: Menores tasas de crecimiento este año y el próximo”, 89-46. Este artículo cita que un obispo de Urabá identificó setenta homicidios políticos el año anterior; el obispo de Apartadó identificó 662 asesinatos en el año anterior. Stan Yarbrow, Despacho de la Prensa Asociada, diciembre 4, 1989.

La desmovilización del EPL, el nuevo sindicalismo social y el paramilitarismo

Entre 1992 y 1993, el EPL experimentó un giro radical hacia la derecha y consiguió arrastrar consigo a Sintrainagro. ¿Cómo es que uno de los sindicatos más próximo a la izquierda en Colombia se convirtió en socio de la industria bananera y de los paramilitares? Una de las explicaciones posibles es que la victoria militar de la derecha en Urabá le permitió tomar el control del sindicato. Pero dada la naturaleza global de la industria bananera, los acontecimientos en Urabá se entrelazaron con los desarrollos globales, revelando cómo la competición a la baja en la industria bananera y los intentos de enfrentar la espiral descendente tuvieron efectos inexorables y a menudo inesperados en todo el planeta. Al igual que en El Salvador, se produjo un proceso de paz interno en diálogo con los acontecimientos económicos mundiales que afectaron decisivamente a las economías y políticas locales (Mark, 2007).

Además del conocido baño de sangre desatado contra la Unión Patriótica, el EPL, mucho más pequeño y concentrado en Urabá, fue, en cierto modo, aún más devastado por la violencia de finales de los años 80. Algunos observadores externos concluyeron que en 1990 el EPL estaba prácticamente diezmado debido a los ataques del ejército y de los paramilitares, así como por las divisiones internas (Observatorio de Derechos Humanos, 1998).

La incesante violencia contra el sindicato y los desmovilizados de las FARC y el EPL tuvo algunos efectos importantes en la reorientación que asumieron las tres organizaciones. El sindicato perdió a muchos de sus líderes más fuertes, activos y radicales, y a muchos de sus miembros. Con los acuerdos de paz de 1984, muchos de los activistas más optimistas e idealistas de las FARC se desmovilizaron para formar la Unión Patriótica; y muchos de ellos también fueron asesinados. Esto dejó a las FARC en manos de aquellos que veían pocas alternativas a la solución

militar. Lo que quedaba del EPL se dividió irremediabilmente. Algunos de sus líderes llegaron a la conclusión de que la supervivencia pasaba por el acercamiento con la extrema derecha, mientras que otros —los “disidentes”— se unieron a elementos de las FARC para los que la lucha armada se había convertido cada vez más en un fin en sí mismo. Parecía que la campaña de asesinatos y terror de la derecha había conseguido eliminar a la izquierda no armada, dentro y fuera del sindicato. Lo que quedaba eran dos grupos guerrilleros despojados de sus alas políticas, y un sindicato y un partido político en manos de aquellos que veían la colaboración con la extrema derecha como la única opción viable.

Además de su estrategia militar, Augura también pudo utilizar la evolución mundial del comercio del banano para presionar a Sintrainagro a adoptar una posición más conciliadora. Con la caída de la Unión Soviética en 1989, las multinacionales bananeras anticiparon un crecimiento de los mercados europeos y aumentaron su producción correspondientemente. Pero cuando los mercados de Europa del Este no se materializaron, los precios se desplomaron. Este contexto, junto a la decisión de la comunidad europea de favorecer a sus antiguas colonias, contribuyó a la “crisis del banano” de 1992-1993, a causa de la sobreproducción en Colombia (CAJ, 1994, p. 155)¹². La caída de los precios de exportación afectó en todos los aspectos a la sociedad de Urabá: el 30 % de los negocios locales cerraron, se disparó el desempleo y el alcalde de Turbo señaló que el número de vendedores ambulantes en la ciudad parecía haberse duplicado de la noche a la mañana (Sandoval, 1997, p. 179).

Augura, por su parte, anunció una pérdida de 80 millones de dólares en 1992 y previamente alegó incapacidad de cumplir con los aumentos salariales. Al mismo tiempo, la asociación hizo hincapié en el común interés de los trabajadores y la patronal en proteger el lugar de Colombia en el comercio mundial del banano. El presidente de Augura ofreció

12 Para una descripción detallada véase Raynolds (s/i.).

enviar a los representantes de Sintrainagro a una gira europea para presionar por un trato más favorable a las importaciones colombianas (Ramírez Tobón, 1997, p. 59). ¿Podrían colaborar los trabajadores y la patronal en el marco de la competición a la baja?

Algunos dirigentes del EPL creían que podían y debían hacerlo. Propusieron que solo un cambio radical de dirección podría salvar a la organización y al sindicato en el cual desempeñaban un rol importante. El líder del EPL, Mario Agudelo, llegó a creer que un acuerdo con los paramilitares era la única alternativa viable para la organización:

Fue entonces cuando sugerimos el lema de la salvación regional y la defensa de la producción de banano. Pensamos que esas ideas podrían crear una mayor apertura con los empresarios, para que dialogaran. Incluir a todos los factores del conflicto, incluso a la derecha con su jefe paramilitar Fidel Castaño. Propusimos la necesidad de una tregua unilateral y un diálogo con el gobierno, como condición para la recuperación democrática de Urabá...Por primera vez, propusimos la posibilidad de crear una alianza con los empresarios bananeros. (Villarraga y Plazas, 1994, p. 390).

En 1991, 2100 miembros del EPL (592 en Urabá) aceptaron una nueva amnistía del gobierno, esta vez apoyada por Fidel Castaño y los paramilitares, quienes, así mismo, aceptaron deponer las armas y donar tierras, dinero y ganado a cientos de desmovilizados de la guerrilla (Observatorio de los Derechos Humanos, 1998; CAJ, 1994, p. 119). La desmovilización paramilitar tuvo corta vida: los hermanos Castaño no tardaron en empuñar sus armas. Los guerrilleros desmovilizados del EPL conformaron un nuevo partido conservando el nombre “Esperanza, Paz y Libertad” (los Esperanzados), y en mayo de 1991 firmaron un acuerdo con Sintrainagro y Augura con el fin de colaborar en un “pacto social” para el desarrollo regional (Informe Semanal de América Latina, 1991). El pacto fue firmado por “diferentes sectores económicos de Urabá los que, comprometidos con un proyecto conjunto, vincularán capi-

tal y trabajo para impulsar el proyecto de paz y desarrollo”. La industria bananera también se comprometió a aportar 23 millones de pesos para el proceso de reinserción (Pacto Social, Urabá, Colombia, 1991, citado en Ramírez Tobón, 1997, p. 64).

Agudelo describió el pacto social en los siguientes términos:

Este fue un primer paso para vincular a la sociedad entera con el proceso....nos propusimos trascender los intereses individuales para fortalecer un proceso de convivencia democrática en la zona...y recibimos una respuesta positiva de parte de la Asociación de Bananeros. Esto generó un nuevo ambiente en las relaciones laborales, bajo el cual los problemas comenzaron a resolverse de otra manera, diferente a las que se habituaba en el pasado. (Villarraga y Plazas, 1994, p. 393).

El movimiento Esperanza, Paz y Libertad llamó a su nuevo enfoque “sindicalismo sociopolítico” (Villarraga y Plazas, 1994, p. 458). A comienzos de 1994, esta postura se había convertido en la posición dominante en el sindicato. El consejero presidencial para la paz en Urabá, anunció: “Las relaciones obrero-patronales ya no son la principal fuente de violencia tal como lo fueron entre 1987 y 1989. Este tipo de violencia ha sido superada” (Ramírez Tobón, 1997, pp. 59-60).

Algunos trabajadores tenían dudas sobre el nuevo acomodo del sindicato con los paramilitares y Augura. En su investigación realizada en 1993, la Comisión Andina observó una profunda división entre los sobrevivientes de la izquierda, que creían que la acción del sindicato debería estar centrada en mejorar las condiciones laborales, y aquellos vinculados al EPL, que consideraban que el sindicato debía minimizar esas demandas, dada la crisis y la amenaza de fuga de la industria (CAJ, 1994, p. 62; Romero, 1997, pp. 9-10).

Si bien las relaciones de Esperanza, Paz y Libertad y Sintrainagro con los bananeros y los paramilitares se suavizaron, no fue así con la vio-

lencia. Las FARC, el Partido Comunista y la Unión Patriótica rechazaron el “pacto social”, denunciando a la dirección del EPL de “renunciar a la lucha de clases y de vender los intereses de los trabajadores” (Villarraga y Plazas, 1994, p. 393). A comienzo de los años 90, dos analistas del EPL escribieron que “la división entre la izquierda que defiende su posición tradicional y aquellos que adoptaron un cambio hacia una política del diálogo y acuerdo nacional, se tornó evidente” (Villarraga y Plazas, 1994, p. 473).

La violencia de la derecha tampoco disminuyó. Los paramilitares contribuyeron con entusiasmo a fomentar el giro a la derecha de Esperanza, Paz y Libertad. Su campaña sistemática de violencia se centró en los miembros más radicales y no armados de la organización. Sindicalistas y activistas políticos declararon a la Comisión Andina que la mayoría de las víctimas de asesinatos, a comienzos de la década de 1990, “eran miembros honestos de los comités de negociación sindical” (CAJ, 1994, pp. 109-110). Como ocurrió durante la década de 1980, la violencia de la derecha apuntó abrumadoramente a la oposición cívica más que a la guerrilla.

Como las facciones de los dos grupos guerrilleros permanecieron en armas, la derecha los responsabilizó de muchos de los ataques a los líderes sindicales. Pero el drástico incremento de la violencia antisindical, que acompañó la toma de la zona por parte de los paramilitares, hizo que esta teoría fuera algo dudosa. La división en el EPL proporcionó más espacio para la acción paramilitar, al permitirles “asesinar a los sindicalistas más radicales que causaban muchos problemas” y culpar por estas muertes a otros actores armados (CAJ, 1994, pp. 109-110). Aunque no siempre se pudo documentar la autoría de estos asesinatos, la identidad política de las víctimas estaba clara: fueron los miembros de la izquierda más abiertos de Sintrainagro y del EPL.

Entre los miembros del EPL que se desmovilizaron, muchos optaron simplemente por rechazar a sus antiguos líderes y retirarse de la nueva

encarnación que asumió su organización y la alianza con la derecha. Un estudio basado en entrevistas con excombatientes del EPL observó con sorpresa la intensidad con que “los excombatientes desacreditaron a su propio partido político” (Uribe, 1990, pp. 49-50).

El débil compromiso social y financiero del gobierno con el proceso de reinserción y los ataques armados de los guerrilleros que quedaban, condujo a los miembros reinsertados del EPL a formar su propia organización de autodefensa: los Comandos Populares. Agudelo describe a los Comandos como grupos formados por trabajadores y excombatientes que se armaron únicamente en defensa propia contra los disidentes del EPL. Distinguió a los Comandos de los paramilitares, que se alzaron con las armas en busca de objetivos políticos y económicos. Los Comandos, explicó, “no son más que una expresión informal, sin un proyecto político común...han emprendido este tipo de respuesta debido a que han sufrido ataques de los disidentes, y por ninguna otra razón” (citado en Villarraga y Plazas, 1994, p. 486).

En 1995 los Comandos operaban en toda la zona bananera. A pesar de las declaraciones de Agudelo, las organizaciones de derechos humanos encontraron pocas diferencias entre estos nuevos grupos armados y los verdaderos grupos paramilitares. Aunque al principio se organizaron en defensa propia, se convirtieron en un “verdadero grupo paramilitar” que tenía como objetivo a los líderes sindicales y a los activistas políticos de izquierda, especialmente en aquellas plantaciones donde el Partido Comunista y la Unión Patriótica tenían peso (cv, 1995, p. 34). La Comisión Andina registró numerosas acusaciones que señalaban que los Comandos “actuaban como paramilitares, armados y apoyados por el ejército y el gobierno nacional” (CAJ, 1994, p. 61). La comisión de la investigación encontró claros vínculos entre los Comandos y los propietarios de las plantaciones, así como con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entidad equivalente al Federal Bureau of Investigation (FBI). Algunas plantaciones, al parecer, mantuvieron

miembros de los Comandos Populares —que no eran trabajadores— bajo salario (CV, 1995, p. 34).

La violencia continuó asediando a los sindicatos y a los trabajadores, incluso cuando se consolidó el “pacto social”. El vicepresidente de Sintrainagro —un miembro reinsertado del EPL— fue asesinado por disidentes del EPL en enero de 1993, y un mes después, también fue asesinado su secretario general por parte de los Comandos (CV, 1995, p. 25; CAJ, 1994, p. 116). En abril, disidentes del EPL mataron a un capataz y tres trabajadores de una plantación, alegando que los tres habían trabajado para los Comandos (CAJ, 1994, p. 123). Después de que, en ese mismo mes, fueran asesinados cuarenta trabajadores en una sola semana, unos 3 500 trabajadores ocuparon durante seis días el coliseo deportivo de Apartadó (CAJ, 1994, p. 130). Para los forasteros, la violencia parecía inexplicable: las organizaciones de izquierda y los grupos guerrilleros se enfrentaron entre sí y contra los trabajadores sindicalizados. No obstante, esta interpretación omite algunos elementos centrales: la violenta imposición del control paramilitar, la purga de la izquierda del EPL y de Sintrainagro, y el acercamiento entre estos dos últimos y Augura.

Las divisiones dentro del sindicato, así como la violencia externa, obstaculizaron seriamente su funcionamiento. En 1994, la Comisión Andina observó que la comunidad ya no podía recurrir al sindicato como aliado en las protestas contra la violación de los derechos humanos. En una ocasión, los nuevos dirigentes de Sintrainagro se negaron a unirse a una huelga convocada como respuesta al asesinato de un activista sindical, y la huelga tuvo que suspenderse (CAJ, 1994, pp. 133-134).

El “pacto social”, no obstante, avanzó. El acuerdo de 1991 había establecido un fondo de seguridad social, y en 1993 el sistema estatal de seguridad comenzó a ofrecer servicios médicos a los trabajadores, quitando este asunto de las manos de las empresas bananeras. Estas también acordaron la carga de un impuesto por cada caja de banano exportada

para apoyar un fondo de vivienda, contribuyendo a la eliminación del sistema de campamentos en las plantaciones (Romero, 1997).

Sin embargo, la violencia no hizo más que aumentar. Las fuerzas paramilitares tomaron el control total de la zona bananera a principios de 1995 (cv, 1995, p. 32). Si bien los paramilitares se establecieron en Urabá desde mediados de los años 80, en 1993 su presencia se volvió permanente, controlando los pueblos del norte en 1993 y los pueblos bananeros en 1995. El nivel de violencia y el desplazamiento aumentaron bruscamente desde finales de 1994 hasta principios de 1995, provocando una verdadera oleada de desplazamientos: más de 20 000 entre noviembre del 1994 y mayo de 1995.

Los bananeros parecen haber estado profundamente implicados en el ingreso de los paramilitares en Urabá. Funcionarios de la filial de la United Fruit Company, Banadex, se reunieron con el jefe paramilitar Carlos Castaño, en 1997, y acordaron proporcionar una paga mensual de apoyo que en total se aproximó a los 2 millones de dólares, antes de que la multinacional vendiera su filial colombiana en 2004, en parte porque temía ser procesada luego que el gobierno de EE. UU. declarara a los paramilitares como una organización terrorista extranjera (Otis, 2007; Lloyd's, 2007).

Centenares de muertes se sucedieron tras las tomas paramilitares en Turbo, Carepa y otras ciudades de la región bananera en 1995 (cv, 1995, p. 32). Tanto la policía como el ejército trabajaron abiertamente con paramilitares, y el DAS, constituido en parte por miembros reinsertados del EPL, colaboró estrechamente con los Comandos Populares afiliados a Esperanza, Paz y Libertad (cv, 1995, p. 39)¹³.

13 A mediados de 1995, unos 100 desmovilizados del EPL se habían convertido en agentes del DAS (Sandoval, 1997, p. 189).

Aunque hubo violencia por parte de todos los bandos, los resultados fueron muy desiguales. Hacia finales de la década de 1990, la derecha tenía el control de Urabá. Los izquierdistas que quedaban fueron sistemáticamente purgados, asesinados y desplazados de Sintrainagro, de los gobiernos locales y de la región.

Así, la transformación del sindicato y de la política local se produjo en el contexto de la toma del poder por parte de los paramilitares y de la insistencia de la industria bananera en la militarización y la unidad regional para apoyar su competitividad internacional. Los acontecimientos posteriores confirmaron la naturaleza interrelacionada de estos desarrollos. En junio de 1997, los Esperanzados exigieron la renuncia de la alcaldesa independiente de Apartadó, Gloria Cuartas. En nombre de la defensa de la industria bananera, de la que dependía la región, argumentaron que su oposición al control militar y paramilitar constituía una amenaza inaceptable que “ponía en peligro la presencia de Colombia en los mercados internacionales” (Sandoval, 1997, pp. 240-241). El Sintrainagro, ahora bajo la conducción de los Esperanzados, se unió al ejército en la “marcha por la paz” contra Cuartas, y los empresarios dieron el día a los trabajadores y ofrecieron el transporte al estadio de Apartadó, donde se realizaba el evento (Sandoval, 1997, p. 241). Cuando el general del ejército, Rito Alejo Río, fue destituido de Urabá en 1998 —y luego obligado a retirarse en 1999— por sus vínculos con los paramilitares, el presidente de Sintrainagro, Guillermo Rivera, fue uno de los oradores principales en un evento organizado en mayo de 1999 en su honor por Augura, en el Hotel Tequendama de Bogotá (Romero, 1997, p. 11).

El contrato de dos años firmado en mayo de 2002 incluía bonificaciones, contribuciones de la empresa a un fondo de vivienda y a un fondo de educación, a ser gestionados por representantes del sindicato y de Augura. Oswaldo Cuadrado Simanca, presidente de Sintrainagro, “hizo énfasis en la armonía y en la buena voluntad bajo las cuales se reali-

zaron las negociaciones, y declaró que el acuerdo beneficiaba a ambas partes” (*El País*, 2002).

Las profundas divisiones entre Sintrainagro y la izquierda colombiana —incluyendo a la mayoría del movimiento sindical—, se hicieron evidentes en la actitud del sindicato respecto a los asuntos nacionales. Cuando el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez visitó Urabá en 2002, Mario Agudelo elogió su “contribución a la pacificación de Antioquia” cuando este fue su gobernador (Rel UITA, 2004). En septiembre de 2003, cuando el presidente Uribe presentó a los votantes colombianos un referéndum de apoyo a su paquete económico neoliberal, la CUT y la izquierda lanzaron una activa campaña contra dicho procedimiento, mientras Sintrainagro lo apoyó. Oswaldo Cuadrado Simanca, presidente de Sintrainagro, se presentó en la agencia de noticias presidenciales el 25 de septiembre publicitando la postura del sindicato¹⁴. El referéndum no se aprobó.

Sintrainagro reafirmó su identificación con el gobierno de Uribe y el ejército después de la masacre de febrero de 2005 en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en Urabá. Esta comunidad es una de las tantas que hay en las zonas de guerra de Colombia, y se estableció con la ayuda de la Iglesia católica, para crear un espacio que rechazaba la presencia de todo actor armado. Haciéndose eco de los comentarios del presidente Uribe en torno a la masacre, la prensa de Sintrainagro se burló del concepto Comunidades de Paz, insinuando su colaboración con las FARC, que eran subversivas por rechazar la presencia del ejército, y subrayando que las ONG internacionales que las apoyaban, incluida

14 La declaración pro referéndum firmada por Sintrainagro se reproduce en el sitio web del gobierno colombiano. http://historico.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2003/septiembre/26/19262003.htm

Amnistía Internacional y las Brigadas Internacionales de la Paz, también eran sospechosas (Cuadrado y Peña, 2005)¹⁵.

Sintrainagro y la solidaridad global

Puede que la globalización haya contribuido a la reconciliación de Sintrainagro con la patronal, la política de derecha y los paramilitares, pero la industria bananera multinacional también ofreció al sindicato una vía para conformar una organización diferente e innovadora a nivel internacional. En 1993, los trabajadores bananeros latinoamericanos respondieron a la constante presión empresarial sobre sus salarios y condiciones de trabajo uniéndose en una confederación de alcance regional para desafiar las estrategias empresariales que promovían la confrontación entre los trabajadores en nombre de la competición a la baja. Mientras Sintrainagro consolidaba sus vínculos con la extrema derecha y los propietarios bananeros, sus dirigentes se reunieron con los sindicatos bananeros de Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá en Costa Rica para conformar COLSIBA (Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros). “COLSIBA representa un logro sin precedentes”, escribió la historiadora Diana Frank, “el resultado de una nueva estrategia global ideada por los sindicatos...En toda América Latina, COLSIBA es la única organización que reúne sindicatos del mismo sector más allá de las fronteras nacionales en una coalición regional autónoma” (Frank, 2005, p. 63).

En 2001, COLSIBA firmó un acuerdo histórico con Chiquita —por lejos, el productor de banana más grande de América Latina, aunque no en Colombia—, que garantizaba los estándares laborales y los derechos de los trabajadores (Proyecto de Educación Laboral en las Américas, Us-

15 Véase también el comunicado de prensa de Sintrainagro, de febrero de 2005, que contradice categóricamente la afirmación de Gloria Cuartas de que el Ejército fue responsable de la masacre: http://www.rel-uita.org/campanias/sintrainagro-2005/notas/comunicado_sintrainagro.htm

LEAP por sus siglas en inglés, 2001). Las organizaciones sindicales y sus partidarios de todo el mundo celebraron el acuerdo como un logro innovador con una empresa históricamente conocida por su política antisindical, y lo consideraron como un hito en la solidaridad transfronteriza entre los trabajadores de empresas multinacionales (Riisgaard, 2003 o 2004)¹⁶. Las organizaciones de solidaridad desde el USLEAP hasta la Red Europea de Acción Bananera (EUROBAN) y BananaLink (Reino Unido), han aclamado el papel de COLSIBA y de Sintrainagro, pero han guardado silencio sobre el contexto que creó el actual Sintrainagro¹⁷.

Mientras los sindicatos de todo el mundo se enfrentan a empresas globales como Chiquita y buscan a tientas nuevas estrategias para hacer frente a la rápida evolución de la economía global, el trabajo transnacional de Sintrainagro y COLSIBA realmente parece desarrollar un modelo potencial para la solidaridad laboral global. Sin embargo, paradójicamente las iniciativas transnacionales de Sintrainagro no han desafiado el orden social local, y Augura ha visto con buenos ojos el activismo internacional de Sintrainagro. Debido a que los salarios y los costos para los productores de banano colombianos son elevados con respecto a los de Ecuador y de algunos países de América Central, los productores colombianos se beneficiaron de la atención de los organismos internacionales a las terribles condiciones laborales en Ecuador. Las mejoras de condiciones en Ecuador y Centroamérica y en las plantaciones de Chiquita aumentaron los costes pagados por los rivales de Augura en el mercado mundial del banano, y de esta manera aumentaron la competitividad de los bananos colombianos a nivel internacional.

16 Curiosamente, este estudio solo evalúa los resultados del acuerdo en Centroamérica, no en Colombia. El autor señala que los sindicatos de izquierda en Guatemala (UNISTRAGUA) mantenían una sospecha comparable con la UITA por su historial de afiliación a la derecha, incluidos los sindicatos “amarillos” dominados por la patronal (2003 o 2004, p. 16).

17 Bananalink cita que las empresas colombianas tienen “uno de los mejores historiales” del mundo “de negociación de convenios colectivos con los trabajadores”, www.bananalink.org.uk/companies/companies.htm.

Aunque los acuerdos sobre los estándares, como aquellos firmados por Chiquita, pueden parecer una alternativa innovadora (o una ampliación) de las formas tradicionales de organización laboral, la experiencia práctica con el acuerdo de Chiquita revela la importancia que siguen teniendo los sindicatos. Dado que no existen mecanismos reales de aplicación, el acuerdo solo ha sido realmente significativo en aquellas plantaciones en las que existe un sindicato fuerte que lo haga cumplir. En caso contrario, es la propia empresa la que debe evaluar su cumplimiento. Incluso cuando COLSIBA y Chiquita firmaron su acuerdo, y las organizaciones de solidaridad laboral elogiaron a Chiquita por tomar “el camino correcto”, la empresa mantenía su versión de la paz laboral en Urabá, canalizando dinero a los paramilitares (USLEAP, 2001b).

Un estudio de COLSIBA realizado cinco años después del acuerdo de Chiquita en 2001, concluyó con cierta tristeza que la empresa había vendido sus operaciones en Colombia (en 2004), y así mismo amenazaba con abandonar sus participaciones en Panamá y Honduras si los trabajadores de esos países se negaban a renunciar a sus convenios colectivos. A la par, estaba desplazando su producción en Guatemala a las plantaciones no sindicalizadas de la costa del Pacífico, y evaluando su implantación en la no sindicalizada Angola. “Una empresa puede estar certificada en un país y beneficiarse así de la publicidad de esta certificación en los países consumidores para toda su gama de productos, mientras desarrollan un mal comportamiento en plantaciones aledañas o desplaza sus plantaciones a áreas no sindicalizadas”. COLSIBA concluyó que este tipo de acuerdos “efectivamente sólo funciona en aquellos países donde los sindicatos (todavía) son lo suficientemente fuertes como para acudir a la mesa de negociación” (Chambron, s.f., 104, 106).

Evaluando al nuevo Sintrainagro

Bajo condiciones extraordinariamente adversas, los trabajadores bananeros de Colombia han logrado presionar los límites y han buscado

los puntos débiles del sistema. A pesar de la fuerte represión y de las pérdidas de vidas, han encontrado formas de organizarse. Sin embargo, han sufrido una violencia incalculable y para poder sobrevivir fueron obligados a incómodas y peligrosas alianzas.

Para aquellos sindicatos que han decidido afrontar el reto de la “competición global a la baja” (*global race to the bottom*) y la represión, como la estrategia patronal orientada a incrementar los beneficios mediante la búsqueda —o creación— de fuentes de trabajo cada vez más baratas, Colombia, con el mayor índice de violencia contra los sindicalistas del mundo, constituye un lugar obvio para trabajar. Los activistas de la solidaridad son comprensiblemente reacios a involucrarse en disputas internas del movimiento obrero colombiano. Sin embargo, una delegación sindical canadiense mostró un interés significativo cuando sus miembros visitaron Urabá en 1997. Estos notaron un marcado contraste entre Sintrainagro y el resto del movimiento sindical colombiano, así como entre Sintrainagro y las demás organizaciones sociales de la región.

En todos los lugares de Colombia los sindicatos fueron asediados por grupos paramilitares de derecha, pero a pesar de ello han demostrado “una determinación increíble para llevar adelante la lucha, aún con todos los pronósticos en su contra”. En Urabá, sin embargo, Sintrainagro se distanció de los tradicionales aliados del movimiento obrero de izquierda. Todas las tendencias políticas, excepto el EPL, habían sido eliminadas del sindicato. Los líderes sindicales expresaron un fuerte desacuerdo con las organizaciones de paz y de derechos humanos, y tienen una visión más benigna de los paramilitares. Los líderes sindicales “nunca reconocieron los abusos cometidos por los militares en la región, ni tampoco los vínculos entre las fuerzas militares y paramilitares”, informaron los canadienses. El comandante militar de la región, Rito Alejo del Río, “solo tuvo palabras de elogio” para Sintrainagro,

describiéndolo como “el modelo de los modelos”. Finalmente, el grupo señaló que:

Hay cientos de exmiembros de este sindicato que se han desplazado a otras regiones del país, y que podrían tener, sin duda, una historia muy diferente qué contar con respecto a la dirección particular que actualmente encabeza Sintrainagro. En nuestra opinión, sus testimonios deberían formar parte de la evaluación final sobre el rol que este sindicato está desempeñando actualmente en la región de Urabá. (Bird *et al.*, 1998).

Otros observadores externos tienen una visión más positiva. Alistair Smith (2001), del *New Internationalist*, solo tiene elogios para el “experimento de paz” en Urabá. “Las masacres genocidas han dado paso a un inspirador proceso de reconstrucción pacífica”, escribió. Celebra las relaciones positivas entre trabajadores y empresas, y los excelentes contratos, argumentando que el sindicato ha superado con éxito las viejas divisiones ideológicas.

Sintrainagro ha desarrollado estrechos vínculos con los sindicatos europeos. Hacia 1998 se afilió al Sindicato Internacional de Alimentos, Agricultura, Hotel, Restaurant, Catering, Tabaco y afines (IUF), con sede en Ginebra. La Federación de Trabajadores daneses y el gobierno danés comenzaron un programa de formación anual conjunta con Sintrainagro en 1997, que se prorrogó por seis años más en el 2000. El Centro de Solidaridad Sindical de Finlandia lleva a cabo un programa similar, mientras que un sindicato español financia la construcción de una escuela primaria para el sindicato en La Chinita, un vecindario dominado por Esperanza, Paz y Libertad en Apartadó (Romero, 1997).

El alto nivel de violencia en Urabá claramente forzó a los trabajadores bananeros de la región a tejer alianzas contradictorias en las últimas tres décadas. Romero (1997) sugiere que los trabajadores bananeros de Urabá “probablemente, con anterioridad, no eran tan revolucionarios

como las autoridades los acusó de ser, y actualmente no son tan reaccionarios como su oposición lo afirma” (p. 115). Más bien han tenido que ajustarse a los cambios en los contextos sociales en los cuales han tenido que actuar. Sin embargo, Romero probablemente exagera cuando sugiere que “los revolucionarios de las últimas décadas han optado actualmente por la ciudadanía” (1997, p. 15). Como señala la Delegación Sindical Canadiense, “los revolucionarios de las últimas décadas” pueden haber sido asesinados, desplazados y sustituidos por un tipo de liderazgo y por una base muy diferente. No obstante, aún bajo condiciones rápidamente cambiantes, de violencia política extrema y limitado margen de maniobra, los trabajadores bananeros colombianos y su sindicato han continuado su lucha por mejores condiciones de trabajo, por la solidaridad y por una vida digna.

El estudio de los sindicatos de Urabá sugiere una serie de conclusiones preocupantes sobre las posibilidades que se abren al trabajo bajo un régimen de globalización neoliberal. En primer lugar, a pesar de que la particular coyuntura histórica condujo a gobiernos y empleadores de América Latina, y de otras partes del mundo, a expandir los derechos de los trabajadores a mediados de siglo XX, al menos en ciertos sectores (urbanos y manufactureros), a fines de siglo, se reavivaron y ampliaron las antiguas estrategias de control de la mano de obra, incluida la violencia abierta. Si bien algunas tácticas, a menudo asociadas con la globalización, como el aumento del poder empresarial mediante la disminución del papel del Estado y la dispersión de los lugares de producción para ejercer una presión a la baja sobre los salarios y las condiciones de trabajo pueden resultar novedosas en el sector manufacturero, desde hace mucho tiempo constituyen la norma en la agricultura de exportación colonial y neocolonial.

El caso de Urabá tampoco es la excepción. Por el contrario, para algunos agentes del poder empresarial y estatal, Urabá constituye la tendencia del futuro. Como informó el *Houston Chronicle*, “el desenfreno

paramilitar en Urabá tuvo implicaciones mucho más allá de los campos de banano”. De acuerdo con un reciente informe del gobierno colombiano, las estrategias y las tácticas de los paramilitares en Urabá sirvieron como un “modus operandi” cuando las milicias llevaron su campaña antiguerrillera a nuevas zonas de Colombia. Se convirtió en un modelo nacional aprobado por muchas personas”, dijo León Valencia, analista político de Bogotá” (Otis, 2007). Estados Unidos, que considera al presidente colombiano Álvaro Uribe como su principal aliado regional y que sigue invirtiendo dinero en los militares colombianos, ha declarado que el caso colombiano representa un “buen modelo” de los esfuerzos norteamericanos en otras partes del mundo (Reuters, 2007).

Una combinación de extraordinaria represión contra la izquierda y un llamamiento por parte de la patronal a la colaboración en nombre de la salvación regional, crearon el contexto para la transformación política de Sintrainagro, que pasó de ser uno de los sindicatos más radicales de Colombia a uno aliado a la derecha. Pero, aunque Sintrainagro se vio forzado a pactar con la derecha local, mantuvo e incluso asumió un papel de liderazgo en la solidaridad y organización internacional, una de las respuestas obreras más innovadoras de los trabajadores frente a los retos planteados por el alcance global de las empresas, que suele asociarse con la izquierda.

La experiencia de Sintrainagro sugiere que el internacionalismo puede ser una estrategia para un sindicato que tiene muy poca influencia en el frente local, y que ha sido forzado a tejer relaciones estrechas con la patronal. El internacionalismo puede tender hacia un incómodo proteccionismo, especialmente cuando la patronal se une o lidera la lucha contra las violaciones laborales en otros lugares. A medida que la globalización socava la capacidad de los sindicatos para hacer frente a los desafíos a nivel local, debilita los vínculos de cualquier alianza internacional. Aunque los sindicatos bananeros están, en cierto modo, a la vanguardia de creativas estrategias transfronterizas, al igual que otros

sindicatos, siguen buscando la manera de hacer realidad su potencial fuerza colectiva.

Mientras que muchos de los trabajadores del mundo solo están empezando a reconocer y a enfrentarse a los retos de la globalización neoliberal, los trabajadores bananeros llevan más de un siglo enfrentándose a sus precursores. La actual combinación de Sintrainagro, de apelar a la colaboración obrero-patronal a nivel local y al internacionalismo obrero fuera del país, puede parecer algo insólita, pero el abanico de respuestas que las empresas bananeras han utilizado para aumentar sus ganancias a expensas de los trabajadores y de los derechos humanos, es un rasgo más tradicional que excepcional en el consolidado orden mundial neoliberal. La experiencia de los trabajadores bananeros de Colombia y sus sindicatos es realmente aleccionadora.

Bibliografía

- Anner, Mark. (2007). Forjando un nuevo activismo laboral en las industrias exportadoras latinoamericanas. *International Labor and Working Class History*, (72).
- Bird, John, Fairbairn, Bill, Hetu, Carl, Kitchen, Rick, Luckhardt, Ken, Onyalo, David, Smith, Don et al. (1998). Informe de la Delegación Sindical Canadiense en Colombia. Recuperado de: <http://www.colombiasupport.net/199802/canadaunion.html>
- Botero, Fernando. (1990). *Urabá: colonización, violencia, y crisis del Estado*. Medellín: s/i.
- Botero Herrera, Fernando y Sierra Botero, Diego. (1981). *El mercado de fuerza de trabajo en la zona bananera de Urabá*. Medellín: s/i.
- Bucheli, Marcelo. (2003). United Fruit Company en América Latina. En Steve Striffler y Mark Moberg (Eds.) *Guerras del banano: poder, producción e historia en las Américas*. NC: Durham.
- Carbonell Blanco, Rafael y Erazo Coronado, Lucy. (1987). *Hacia una central sindical unitaria*. Bogotá: s/i.

- Chambron, Anne Claire. (s/i). ¿Pueden las normas voluntarias aportar soluciones? Conferencia Internacional del Banano. Documentos Preparatorios. Recuperado de: <http://www.abc2.org/images/stories/textibc/finadoc.pdf>.
- Chomsky, Aviva. (1996). *Los trabajadores de las Indias Occidentales y la United Fruit Company en Costa Rica, 1870-1940*. Baton Rouge: s/i.
- Comisión Andina de Juristas/Seccional Colombia. (1994). Informes regionales de derechos humanos. Urabá. Bogotá.
- Comisión Verificadora. (1995). *Informe de la Comisión Verificadora de los Actores Violentos en Urabá*. Centro de Investigación y Educación Popular, Urabá. Bogotá.
- Frank, Dana. (2005). *Bananeras: las mujeres transforman los sindicatos bananeros de América Latina*. Cambridge: MA.
- Martin, Gerard y Steiner, Claudia. (1995). *El destino de la frontera: Urabá en los años Noventa*. Bogotá: CINEP.
- Medina, Medófilo. (1992). Violencia y desarrollo económico: 1945-50 y 1985-88. En Charles Bergquist, Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda (Eds.) *La violencia en Colombia: La crisis contemporánea en perspectiva histórica*. Wilmington: DE.
- Observatorio de Derechos Humanos. (1998). Partes IV y V. “Guerra sin cuartel: Colombia y el derecho internacional humanitario”. Nueva York.
- Pearce, Jenny. (1990). *Colombia: Inside the Labyrinth*. London: s/i.
- Ramírez Tobón, William. (1997). *Urabá: Los inciertos confines de una crisis*. Bogotá: s/i.
- Raynolds, Laura T. (s/i). El comercio mundial del banano. En Striffler y Moberg (Eds) *Las guerras del banano*, s/i.
- Riisgaard, Lone. (2003 o 2004). El acuerdo marco Uita/Colsiba-Chiquita: un estudio de caso. Documento de trabajo de la OIT, Ginebra, s/i. Recuperado de: <http://www.ilo.org/public/english/employment/multi/download/wp94.pdf>

Rodríguez D, Carlos A. y Rizzo Madrid, Benjamín. (s/f). *Retrospectiva del movimiento sindical*. Recuperado de <http://www.cut.org.co/pdf/sidicalismo-mundo.pdf>

Romero, Mauricio. (1997). “Los trabajadores bananeros: de subditos a ciudadanos”, documento elaborado para el proyecto “Reinventar la emancipación social” del Centro de Estudos Sociais Universidad de Coimbra, Portugal: <http://www.ces.fe.uc.pt/emancipa/research/pt/ft/uraba.html>

Sánchez G., Gonzalo. (2001). Introducción: Problemas de violencia, perspectivas de paz. En Charles Bergquist, Ricardo Peñaranda y Gonzalo Sánchez G. (Eds.). *La violencia en Colombia, 1990- 2000: Hacer la guerra y negociar la paz*. Wilmington: DE.

Sandoval O., Marbel. (1997). *Gloria Cuartas: Por qué no tiene miedo*. Bogotá: s/i.

Uribe A., María Victoria. (1990). *Ni canto de gloria, ni canto fúnebre: el regreso del EPL a la vida civil*. Bogotá: s/i.

Uribe, María Teresa. (1992). *Urabá: ¿región o territorio? Un análisis en el contexto de la política, la historia y la etnicidad*. Apartado: s/i.

Villarraga Sarmiento, Álvaro y Plazas Niño, Nelson Roberto. (1994). *Para reconstruir los sueños*. Bogotá: s/i.

Notas periodísticas

CNE. (26 de septiembre de 2003). Organizaciones sindicales de Antioquia invitan a votar el referendo. Recuperado de: www.presidencia.gov.co/cne/2003/septiembre/26/19262003.htm

Cuadrado Simanca, Osvaldo y Peña Restrepo, Luis Guillermo. (7 de abril de 2005). San José de Apartadó requiere de una solución integral. Recuperado de: http://www.rel-uita.org/sindicatos/comunicado_sintrainagro-7-4-2005.htm

El País. (23 de mayo de 2002). Finalizó paro bananero en Urabá. <http://elpais-ali.terra.com.co/paionline/notas.Mayo232002/bananeros.html>

- Emanuelsson, Dick. (2003). ¿Los Mochacabezas se volvieron pacifistas? La Fogata. Recuperado de: http://www.lafogata.org/003latino/latino11/co_mocha.htm
- Informe Semanal de América Latina. (16 de noviembre de 1989a). Colombia: Política y violencia. *Informe Semanal Latinoamericano*, 89-45.
- Informe Semanal de América Latina. (23 de noviembre de 1989b). Colombia: Menores tasas de crecimiento este año y el próximo. *Informe Semanal de América Latina*, 89-46.
- Informe Semanal de América Latina. (14 de diciembre de 1989c). Se acabó la huelga bananera. *Informe Semanal de América Latina*, 89-49.
- Informe Semanal de América Latina. (2 de mayo de 1991). Pacto social. *Informe Semanal de América Latina*, 91-16.
- Lloyd's, List. (28 de marzo de 2007). Banano, tapones y bombas: Cómo los pagos de Chiquita a los terroristas le estallaron en la cara. *Lloyd's List*, s/i.
- Otis, John. (2 de abril de 2007). Los críticos cuestionan la afirmación de Chiquita de que fue obligada a pagar a los paramilitares colombianos. *Houston Chronicle*, s/i.
- Reuters. (19 de enero de 2007). Colombia 'buen modelo' para la guerra contra las drogas en Afganistán, dice Estados Unidos. *Reuters*. Recuperado de: <http://today.reuters.com/news/articlenews.aspx?type¼worldnews&storyID¼2007-01-0T010936Z01N19329346RTRUKOC0US-COLOMBIA-AFGHAN-RUGS.xml>
- Rel UITA. (19 de mayo de 2004). Huelga bananera en Urabá. UITA. Recuperado de <http://www.rel-uita.org/campanias/uraba-2004/articulos/huelga-uita.htm>
- Smith, Alistair. (Diciembre de 2001). Creciendo en unidad: La estrategia de paz de la Unión funciona en Urabá, Colombia, Industria bananera. *New Internationalist*, 28-29.
- United Press International. (23 de octubre de 1989). 11 muertos en la violencia del fin de semana en Medellín.

U.S. Labor Education in the Americas Project [USLEAP]. (s.f.). Chiquita tries high road. Recuperado de: <http://www.usleap.org/Banana/bananatemp-new.htm>

USLEAP. (14 de junio de 2001b). La UITA, COLSIBA y Chiquita firman un acuerdo histórico sobre derechos sindicales para los trabajadores del sector bananero. *Usleap*, s/i.

USLEAP. (Junio de 2001a). Acuerdo UITa/COLSIBA sobre libertad de asociación, normas laborales mínimas y empleo en las Operaciones Bananeras de América Latina. Recuperado de: <http://www.usleap.org/Banana/Chiquita/Chiquita-IUF-COLSIBAAgreementText.html>